

DIÁLOGOS. REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA

Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica



Las representaciones sociales de la clase media en las coyunturas de conflicto social en la Costa Rica neoliberal. 1984-2000 Bach. Rodrigo Quirós Castro.

Comité Editorial:

Director de la Revista Dr. Juan José Marín Hernández jmarin@fcs.ucr.ac.cr

Miembros del Consejo Editorial: Dr. Ronny Viales, Dr. Guillermo Carvajal, MSc.
Francisco Enríquez, Msc. Bernal Rivas y MSc. Ana María Botey

Miembros del Consejo Asesor Internacional: Dr. José Cal Montoya, Universidad de San Carlos de Guatemala; Dr. Juan Manuel Palacio, Universidad Nacional de San Martín y Dr. Eduardo Rey, Universidad de Santiago de Compostela, España

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 86 de 133) p. 86

Palabras claves:

Movimientos sociales, gobernanza, Costa Rica, representaciones sociales, ideología, conflicto social

key words:

Social movements, governance, Costa Rica, social representations, ideology, social conflict

Resumen

El trabajo analiza los movimientos sociales desarrollados por la clase media a finales del siglo XX. El artículo parte de la premisa que los principales conflictos sociales de las décadas de los ochenta y noventa, y los elementos simbólico-discursivos que acompañaron estas coyunturas conflictivas, se centraban en la reestructuración social que atravesaban las capas medias urbanas.

El trabajo muestra la persistencia de etiquetas nacionales en los discursos contendientes en las coyunturas de algidez social de la década del 90, la palabra clave aquí es democracia. Sin embargo, lo que los sectores entienden por democracia se limita a los procesos formales de elección periódica, y su recurrencia discursiva enfatiza la necesidad de orden y respeto hacia la autoridad. Por otro parte, los voceros de los sectores sociales asumen el concepto de democracia a partir de la sustancialización de prácticas de inclusión política y/o de políticas sociales cuyo marco de referencia es una clase media implícita. En este sentido esta divergencia semántica marca una profunda brecha que se subsana por la desconfianza y deslegitimación de los espacios de representación formales, tal como el no reconocimiento de la Asamblea Legislativa como un espacio legítimo per se. El trabajo retoma así uno de los problemas mas importantes como es la gobernanza, esta vez exigida por sectores sociales diferentes al dominante.

Abstract

This article analyzes the social movements carried out by the middle class toward the end of the Twentieth Century. The article parts from the premise that the major social conflicts that arose during the 80's and 90's, and the symbolic and discursive factors that accompanied this conflictive situation, were mainly due to the social restructuring being experienced by the urban middle class strata.

The work shows the persistent use of national labelling in the contending discourses during the climate of social algidity of the 90's; the key word here is democracy. However, what the social sectors understand by democracy is strictly the formal periodical election processes, emphasizing the need of order and respect toward the authorities in their discursive recurrence. On the other hand, the spokespersons for the social sectors interpret the concept of democracy in terms of substantiation of political inclusion policies and/or social policies whose baseline scenario is implicitly the middle class. In this sense, this semantic divergence opens a wide gap that is exculpated by distrust and delegitimization of the formal representation spaces, such as refusing to acknowledge the General Assembly, per se, as a legitimate space. The work resurfaces one of the mayor problems which is governance, this time claimed by the social sectors and not the ruling sector.

Rodrigo Quirós Castro. Bachiller en Historia. Profesor de la Sede de Occidente Universidad de Costa Rica. Estudiante de maestría del Posgrado Centroamericano de Historia, Universidad de Costa Rica.

**Las representaciones sociales de la clase media en las coyunturas de conflicto social en la
Costa Rica neoliberal. 1984-2000**

Bach. Rodrigo Quirós Castro

Introducción

La hipótesis orientadora del presente trabajo es que los principales conflictos sociales de las décadas de los ochenta y noventa, y los elementos simbólico-discursivos que acompañaron estas coyunturas conflictivas, se centraban en la reestructuración social que atraviesan las capas medias urbanas.¹ Sostenemos que el concepto de “clase media”, tal como se puede presentar en la cotidianidad, no es un concepto analítico propiamente, sino una categoría ideológica que mixtifica al sector social concreto de “capas medias”, las cuales se caracterizan por su vinculación a los espacios de crecimiento y modernización del Estado, en boga durante el período desarrollista (1953-1978).

Planteamos que la orientación discursiva mesoclasista se perdió en los círculos oficiales de poder. De ahí que la legitimación del programa de Reforma del Estado emprendido a partir de la década del 80 se justifique en base al discurso tecnocrata neoliberal, trágico y sacrificial;² la supuesta neutralidad de este discurso contiene un ataque a las instituciones descentralizadas del Estado, legadas del proceso específico de acumulación capitalista e incorporación/cooptación de los sectores populares durante el desarrollismo y más allá. Esta ofensiva, por lo demás, es emprendida por los principales sectores político-

¹ En efecto, según la socióloga Milena Vega la clase media costarricense se encuentra en un proceso de reacomodación al cambiar sus ramas de actividad y ocupación, sin embargo, según esta autora, el sentimiento de inseguridad que se percibe se debe en lo fundamental al proceso de Reforma del Estado, siendo el empleo público el otrora sostén de este sector. Los elementos simbólico-representacionales fueron, sin embargo, descuidados. Vega, Mylena. “La clase media en transición: situación y perspectivas al finalizar el siglo XX” En: Revista de Ciencias Sociales N° 86-87 (abril 1999-enero 2000), EUCR. San José, Costa Rica. pp. 27-46.

² Sobre las contradicciones inherentes al discurso neoliberal; y sobre como este pensamiento supone y exige el sacrificio del aquí y el ahora de los sujetos sociales en aras de un futuro promisorio inalcanzable; promesa que Hinkelammert denominó como “sacrificial”, véase: Hinkelammert, Franz. *Crítica de la Razón Utópica*. Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José: 1984.

empresariales del país, en aras de captar nuevos espacios de inversión subordinados a una reorientación de las dinámicas de acumulación del capitalismo global.

Señalamos también como los sectores populares, o al menos sus voceros sindicales, han remodelado los elementos discursivos, desarrollados en el período anterior, para resemantizarlos e imprimirles un carácter de lucha y movilización. Podría parecer paradójico, que las movilizaciones de los sectores populares se hacen en defensa del Estado mismo, sin embargo, la lucha por la defensa de las instituciones descentralizadas, u otros logros laborales del sector público, responden a la defensa de conquistas de estos sectores dentro de los espacios de poder.³

Para ello esta investigación estudia la utilización del universo discursivo construido durante coyunturas de conflicto social. Dado el amplio carácter, en términos socio-laborales, de las capas medias costarricenses, elegimos a un sector al cual le dimos seguimiento durante los dos decenios bajo estudio, en sus confrontaciones con el Estado. El sector elegido fueron los maestros. Sector representativo de las capas medias y políticamente activo durante el período en estudio. Asimismo, anotamos la confluencia de otros grupos socio-laborales en el desarrollo de ciertos momentos de conflicto, cuyas visiones auto-identitarias también fueron anotadas como parte del discurso de protesta.

Las coyunturas elegidas fueron, primero, la huelga de maestros del primero de febrero de 1984, producto de la falta de reajuste salarial durante estos años, demanda que tiene su origen en una movilización, y un posterior acuerdo con el Estado, acaecido en 1983. La segunda coyuntura se dio en septiembre de 1989 en la que se solicitaba un aumento salarial, y en la que se comenzaba a ver con preocupación las intenciones del Estado por modificar el régimen de pensiones del magisterio. La tercera coyuntura, la huelga magisterial de 1995, representa la culminación, hasta ese momento, de la problemática de

³ Al respecto véase: Alvarenga, Patricia. *De vecinos a ciudadanos: movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*. EUCR, EUNA. San José, Costa Rica: 2005. Cap.6. pp.263-298.

las pensiones magisteriales y los intentos del Estado por modificar su involucramiento en dicho régimen, esta coyuntura confluyó con una serie de conflictos sociales paralelos, tales como las huelgas de los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra la transnacional Millicom que operaba de forma anticonstitucional en el país y que finalizó días antes de iniciarse la huelga nacional del magisterio. Por último, estudiaremos los discursos magisteriales y populares en el llamado “combo” del ICE del 2000.

El elemento central de ambos discursos fue la democracia; sin embargo, la representación que hacen los actores de ésta resulta disímil. Asimismo, a lo largo de la década del noventa, especialmente, los voceros de los sectores subordinados lograron articular un discurso reivindicativo que esbozaba su auto-representación frente a los grupos en el poder, decantando un proceso de formación de sujeto político popular aún abierto.

Las fuentes para esta investigación fueron los periódicos de: La Nación, La Voz de Ande, La República, La Libertad y el Semanario Universidad, todos fueron consultados para los meses de enero a febrero, en 1984, de agosto a septiembre, en 1989, de mayo a julio, en 1995, y los meses de marzo a abril durante el 2000. La única excepción fue La Voz de ANDE, la cual aparte de las coyunturas antedichas se consultó en su totalidad en la década del ochenta.

Con respecto a estos medios, el periódico La Nación es un diario de gran difusión en Costa Rica, su línea editorial es claramente pro-empresarial y neoliberal; es sin duda el medio de prensa que mejor representa estos intereses, y en sus espacios de opinión se reproducen las opiniones de los voceros y/o ideólogos de estos sectores; el medio también fomentó la línea oficialista en las mentadas coyunturas, permitiendo la reproducción de la visión de los sectores oficiales o empresariales. La República es también un diario que representa a sectores dominantes, sin embargo, sobretudo en la década de los ochenta estuvo fuertemente vinculado con los intereses del Partido Liberación Nacional, mientras La Nación se vinculó con la oposición de derecha a

Liberación. La Voz de ANDE se utilizó por ser una fuente directa para captar los discursos del gremio magisterial, particularmente los de los voceros de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Asimismo, el periódico Libertad, medio de prensa del sector más consolidado de la izquierda costarricense, especialmente en los ochenta, se utilizó para indagar en las visiones de otros sectores magisteriales allende la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), sectores más vinculados con la izquierda misma. Por su parte, el Semanario Universidad, es un medio autónomo, producido en la Universidad de Costa Rica, conducido por académicos, su línea es abiertamente crítica, lo que permite analizar discursos divergentes y/o alternativos frente al poder.

El Estado, la crisis y la nueva dinámica de acumulación

El caso costarricense, dentro de la historia política regional se ha destacado por el poder relativo de las clases subalternas; hecho que condujo a su temprana incorporación/cooptación dentro de los espacios de poder político. En efecto, merced a la carencia de mano de obra y de instituciones coloniales más flexibles, las clases dominantes tuvieron que negociar durante el proceso de construcción y consolidación del Estado y a, posteriormente, crear muletillas ideológicas que sustentaran al débil potencial represivo del aparato estatal. De ahí que se diera una relativamente anticipada discusión de la llamada “cuestión social”, a inicios del siglo XX, ante el surgimiento de los grupos obrero-artesanales;⁴ denotando así las necesidades del poder por incorporar y cooptar a los sectores populares dentro de los beneficios del esquema de reproducción social. En este sentido el Estado costarricense optó, en un proceso no lineal e impulsado por la capacidad de resistencia de los sectores subalternos, por la incorporación vertical de los mismos, y la ampliación de los órganos de seguridad internos de carácter civil.⁵

⁴ Taracena, Arturo. “Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870-1929)”. En: Acuña, Víctor Hugo (ed.) *Historia General de Centroamérica IV*. FLACSO. Madrid, España: 1993. p.221.

⁵ Sobre el declive de las fuerzas castrenses costarricenses, véase: Muñoz, Mercedes. *El Estado y la abolición del ejército 1914-1949*. Porvenir. San José, Costa Rica: 1990.

El discurso nacional es una de estas muletillas ideológicas, fundamental en la construcción de hegemonía, merced a su éxito en crear un espacio simbólico que se pretende transclasista. El cual, emitido desde el poder, logra canalizar los conflictos sociales por vías de un imaginario de “destino compartido”.⁶ El desarrollo del Estado costarricense en el período de crisis liberal (1914-1948) fortaleció la tendencia integracionista de los sectores populares. En efecto, ya en el siglo XX, la nacionalidad costarricense, como señaló Iván Molina, se modeló por un imaginario integrista.⁷

En la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional (PLN), intentó, con gran éxito, representar con su propuesta ideológico-programática la idealidad de ese supuesto “ser costarricense”. De esta forma la simbólica de pacifismo, democracia, igualdad, fraternidad y laboriosidad, sustentarían el marco estatal-institucional que el Partido terminaría por considerar su legado exclusivo, vaciando de contenido las luchas populares que impulsaron las Reformas Sociales de la década del cuarenta y la paulatina conquista de los sectores populares de la democracia costarricense a lo largo del período Liberal; legado que se cristalizaría en el Tribunal Supremo de Elecciones y las Instituciones Autónomas del Estado, cuya ampliación y mejora en términos de sistematización frente al esquema de reproducción global sí sucedieron en las décadas de hegemonía del PLN (1953-1990).

No es casual que los ideólogos tempranos del Partido, Rodrigo Facio y Carlos Monge, postularán la existencia de un pasado mítico de democracia rural, el cual sería el supuesto sostén de ese ser nacional. En este sentido el discurso del PLN presentaba su programa de modernización capitalista como un regreso. Retorno al pasado mítico-igualitario, supuestamente corrompido por los grupos liberales y caldero-comunistas. El umbral utópico se sostenía sobre los supuestos ejes de la gestión técnica del Estado que llevaría a

⁶ Palmer, Steven. “Sociedad Anónima, Cultura Oficial: Inventando la Nación en Costa Rica, 1848-1900”. En: *Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1900)*. San José. Porvenir-Plumsock Mesoamerican Studies. 1992. p.197.

⁷ Molina, Iván. Op. Cit. p.38.

la formación de una sociedad de “clase media”.⁸ Por lo anterior el horizonte del proyecto fue de orientación mesoclasista, al menos a nivel ideológico-discursivo, como señaló ya Jaime Delgado Rojas.⁹

Estos elementos discursivos no se limitaron, sin embargo, al nivel simbólico sino que se tradujeron en políticas tendientes a la modernización nacional capitalista, que ciertamente involucraría a las capas medias. En efecto, a partir de 1953 el Estado creció en funciones gracias principalmente, a las instituciones autónomas y al Servicio Civil, enmarcadas dentro de las políticas económicas del PLN. Convirtiéndose el Estado en un importante empleador, oferente además de gran variedad de nuevos servicios, esenciales para programa de desarrollo industrial, entre estos: energía barata, mano de obra calificada preparada en diversas instituciones públicas, aumento en la productividad de la misma, producto de su calificación y la ampliación de los servicios de salud, tecnificación del agro, etc.

El proyecto fue, efectivamente, un intento exitoso de modernización capitalista, que en lo fundamental fortaleció, al diversificar y modernizar, a la burguesía costarricense,¹⁰ ruta por lo demás típica del desarrollo latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XX, en la que se redefinieron las relaciones tradicionales de dependencia de la región frente a los centros hegemónicos del capitalismo mundial.¹¹

⁸ Molina, Iván. *Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*. EUCR. San José, Costa Rica: 2002. Capítulo V “Edades de Oro”. Especialmente p.74

⁹ Delgado, Jaime. *El Partido Liberación Nacional: análisis de su discurso político-ideológico*. Editorial Imprenta Nacional. San José, Costa Rica. 1983. p.94.

¹⁰ Rovira, Jorge. *Estado y política económica en Costa Rica (1948-1970)*. Editorial Porvenir. San José, Costa Rica. 1982.

¹¹ Ayala, Roberto. “América Latina: la reestructuración de las relaciones de dependencia.” En: *Revista de Ciencias Sociales* N° 103-104, (enero-julio 2004) pp.115-126. EUCR. San José, Costa Rica. Para el caso costarricense véase: Solís, Manuel. *Costa Rica: ¿Reformismo socialdemócrata o liberal?* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-. San José, Costa Rica. 1992. Y: Vargas, Luis Paulino. *Liberalización y ajuste estructural, o la autodestrucción del neoliberalismo, Costa Rica (1985-1997)*. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2002.

Debemos destacar como la alineación incondicional del PLN para con los proyectos contra-insurgentes de Washintong, especialmente a partir de 1960, le garantizaron viabilidad política a su proyecto modernizador.¹² El proyecto buscó entonces renovar los sectores agro-exportadores tradicionales así como generar cierto nivel de diversificación económica mediante la promoción de industrias, aprovechándose, sabiéndolo o no, de las posibilidades globales de crecimiento del período.

La posterior crisis de la década de los ochenta se origina en las contradicciones de la propia dinámica de acumulación capitalista a escala planetaria. En efecto, la estanflación surgida en los países centrales, producto del exitoso crecimiento de la posguerra, se traduce en la década de los setenta en una huida de capitales del centro hacia la periferia, tendencia violentamente revertida por la administración Reagan durante los ochenta al elevar las tasas de interés del Tesoro de los Estados Unidos. El consecuente aumento del peso de los intereses de la deuda sume a la región en lo que luego se denominó “década perdida”,¹³ siendo Costa Rica una de las primeras economías en ser abatidas en toda América Latina.

La situación de endeudamiento se originaba en el seno de la dinámica de acumulación desplegada durante el período desarrollista. Esta, en efecto, se sustentó en la promoción de un sector industrial fuertemente dependiente, y transnacionalizado, el cual importaba casi todos sus insumos. Asimismo, la penetración del capital extranjero contribuyó a limitar la planta industrial a centros de ensamblaje para ingresar al mercado protegido centroamericano.

En efecto, Molina y Palmer han señalado como entre 1953 y 1972 se desarrolló una nueva tecnología de agro-exportación, donde además se generó un crecimiento

¹² En la década de los cincuenta hubo mucha tirantez entre el PLN y el gobierno de los E.E.U.U., este último incluso apoyo a sectores que representaban una opción militar frente al gobierno liberacionista. Véase: Bowman, Kirk. “¿Fue el compromiso y el consenso lo que llevó a la consolidación democrática en Costa Rica? Evidencias de la década de 1950”. En: *Revista de Historia* N° 41. Enero-junio 2000. EUNA-EUCR. Heredia, Costa Rica.

¹³ Ayala, Roberto. Op. Cit.

vertiginoso del sector industrial, amparado, primero en la ley de promoción industrial del 59, y luego, en el ingreso al Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) en el 63. El modelo fue relativamente exitoso, en cuanto al crecimiento y diversificación de la economía durante los años 1953 a 1978. En efecto, el Producto Interno Bruto creció un 6,3% entre 1950 y 1978, la economía se diversificó y modernizó, gracias a los nuevos servicios estatales y a las nuevas industrias, haciendo prosperar a un significativo conjunto de sectores medios.¹⁴

Como venimos señalando, esta dinámica perseguía la modernización de la estrecha élite oligárquica para dar paso a un cuerpo más amplio y moderno que recibiera a los sectores burgueses emergentes, en aras de formar una nueva burguesía nacional.¹⁵ También habría que enfatizar el respaldo generado entre los sectores transnacionales de los centros hegemónicos del capitalismo mundial, que acompañaron, y muy pronto ritmaron los procesos de crecimiento en toda la región.

En el caso costarricense al endeudamiento crónico, producto del esquema de acumulación se le sumó un amplio crecimiento del sector público que aceleró la modernización de las estructuras tradicionales de acumulación al crear un cuerpo de profesionales y técnicos capaces de ocuparse en este nuevo esquema.¹⁶ De ahí la importancia de los servicios universales durante el período, educación y salud, servicios que crearon las condiciones para la consolidación de un sector de capas medias urbanas, aunado a una política sostenida de salarios crecientes lo largo del período.

Tanto la agro-exportación como el desarrollo industrial fueron los baluartes del proceso de modernización, sin embargo, su eje de conducción y su principal impulsor fue el

¹⁴ Molina, Iván y Palmer, Steven. *Costa Rica 1930-1966. Historia de una sociedad*. Editorial Porvenir. San José, Costa Rica. 1997. Especialmente el capítulo 3.

¹⁵ Rovira, Jorge. Op. Cit. 1982.

¹⁶ Véase: Vargas, Luis Paulino. *Liberalización y ajuste estructural o la autodestrucción del neoliberalismo, Costa Rica (1985-1997)*. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2002. Pg: 77-94. El primero en señalar el proceso de endeudamiento crónico fue, sin embargo, Rovira Mas, aunque la explicación logra mayor sistematización en Solís. Véase también: Rovira, Jorge. *Costa Rica en los años ochenta*. Editorial Porvenir. San José, Costa Rica: 1987.

Estado que el PLN forjó, cuyos cimientos se esbozaron en las luchas sociales de la primera mitad del siglo. Sin embargo, ambos sectores generaron poco empleo. El Estado fue además del conductor, el principal empleador ante la incapacidad de estos sectores para emplear al grueso de la fuerza de trabajo disponible. En este sentido el Estado se convirtió en el eje articulador del proceso de modernización, no sólo como el creador de todo un aparato institucional de apoyo para los sectores agro-exportadores e industriales, sino como preparador y empleador de la mano de obra.¹⁷

En efecto, tenemos que la participación del sector público en el empleo creció de un 6.2% del total en 1950 a un 16% en 1973, hasta alcanzar un 19.6% en 1980.¹⁸ Para Manuel Solís el Estado resultó central para proveer a amplios sectores de empleo, para él este:

*"...se convierte en el canal de ascenso de los grupos medios, representados por la burocracia pública y los estratos profesionales. Estos grupos identifican sus intereses con la expansión del Estado y mediante él aspiran a representar el interés de la nación."*¹⁹

Como hemos venido diciendo, el Estado se encargó de garantizar una serie de condiciones sanitarias y educativas para la preparación de la fuerza de trabajo. En efecto, en la segunda mitad del siglo XX el Estado logró ampliar los servicios sociales, entre los que destacan la educación y la salud. Esta última casi se universalizó, la Caja Costarricense del Seguro Social logro cubrir al 85% de la población, y los índices de salud, como mortalidad infantil y perspectiva de vida al nacer, alcanzaron índices cercanos a los países desarrollados. En educación se amplió la cobertura escolar y secundaria y el sistema de educación superior a partir de los setenta se empezó a expandir.²⁰

¹⁷ Solís, Manuel. *Costa Rica: ¿Reformismo socialdemócrata o liberal?* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-. San José, Costa Rica. 1992.

¹⁸ OFIPLAN. *Evolución socioeconómica de Costa Rica 1950-1980*. OFIPLAN. San José, Costa Rica. -1 ed.- 1977. p. 318. Considera al sector público como la suma de instituciones del gobierno central, gobiernos locales, instituciones públicas de servicios, empresas públicas financieras y no financieras.

¹⁹ Solís. Op. Cit. p. 322.

²⁰ Molina, Iván y Palmer, Steven. Op. Cit. Especialmente los capítulos 2 y 3.

Finalmente, a partir de la crisis del capitalismo global, que como dijimos se originó en los centros hegemónicos pero fue transferida hacia la periferia, el esquema de endeudamiento crónico, necesario para el crecimiento sostenido, aunado a la incapacidad o falta de voluntad del Estado por construir una estructura tributaria progresiva, se llegó al infeliz término del descalabro económico nacional, y a su consecuente tragedia social. En efecto, hacia fines de los setenta el ritmo de crecimiento disminuía y sólo se necesitó una mayor presión por parte de los intereses de la deuda para que todo el esquema productivo colapsara. Cabe recordar que el intento del PLN por relanzar el proyecto desarrollista, ante la disminución del ritmo de crecimiento comparado con el de los sesenta, mediante la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) a mediados de la década del setenta, no logró superar los vicios señalados, más bien los profundizó.

En este contexto, la salida de la crisis debía ser negociada con los acreedores internacionales. Costa Rica, durante la convulsa década revolucionaria de los ochenta, se beneficia de la política guerrerista de Washintong al presentarse como un espejo de democracia y justicia social frente a la vecina Nicaragua. Espejo que, sin embargo, primero debía ser rescatado de la profunda crisis económica en la que se encontraba sumido el país a inicios de la década. La masiva, e interesada, ayuda exterior logran estabilizar al país. Los condicionamientos cruzados impuestos por los Organismos Financieros Internacionales, gestores de estas ayudas, si bien no son de choque, llaman a una reconversión paulatina, reorientan toda la dinámica de acumulación, especialmente en términos de las clases involucradas.

Por un lado, la retirada del Estado de los servicios universales, visible en el estancamiento de la inversión en educación y salud, y el relanzamiento de una política de contención asistencial focalizada, marcan el derrotero para lo que será el deterioro de las capas medias.²¹ Asimismo, el abandono del sistema de asistencia para los pequeños y

²¹ Véase: Sojo, Carlos. *Los de en medio*. FLACSO, San José, Costa Rica: 1997.

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

medianos productores rurales y el subsecuente deterioro real de estos sectores, conducen a su semi, o completa, proletarización, compatible con los intereses de la agro-exportación rural.²²

Por otro lado, el masivo sistema de subsidios estatales para los nuevos sectores exportadores reproduce la dinámica de endeudamiento crónico, esta vez, centrada en sectores cuyo carácter exógeno es del todo evidente, y cuya dinámica de acumulación se traduce en una fragmentación del universo económico local, donde los sectores más dinámicos de la economía aportan relativamente poco a la dinámica de crecimiento del conjunto, salvo como generadores de empleos poco o mal remunerados (maquila o peonaje agrícola). El lento crecimiento económico del período, entre 2% y 3% en promedio, contrasta con el del período anterior, que se sostuvo alrededor del 6%. Mientras, la política de inclusión/cooptación se ha reorientado, calzando con el esquema de paulatina retirada del Estado de los servicios universales. En efecto, la penuria existencial de las capas medias se enmarca en la primacía de una política asistencia focalizada, que pretende contener las manifestaciones más agudas de exclusión, pero no ya garantizar la consolidación de estos sectores, a esto se le suma una economía de lento crecimiento cuya generación de empleo resulta baja, además de la retirada del Estado en términos de empleo, que otrora compensó el lento crecimiento del sector industrial.²³

En el fondo del proceso subyace el interés, globalmente impulsado, por la transferencia horizontal de capitales a favor de su centralización y racionalización transnacional. Dado el peso de las instituciones autónomas del Estado costarricense, estas se han convertido en un botín apetecido por parte de los grupos de inversionistas internacionales, de los cuales nuestra burguesía gerencial, triste engendro del proyecto por construir una

²² Viales, Ronny. “Desarrollo rural y pobreza en Centroamérica en la década de 1990. Las políticas y algunos límites del modelo “neoliberal”. En: *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Vol. 25 N° 2. También: Edelman, Marc. *Peasants against globalization. Rural social movements in Costa Rica*. Stanford University Press: 1999.

²³ Véase: Vargas, Luís Paulino. Op.Cit. Sobre el empleo público y su relación con las transformaciones de la clase media véase: Vega, Mylena. “La clase media en transición: situación y perspectivas al finalizar el siglo XX” En: *Revista de Ciencias Sociales* N° 86-87 (abril 1999-enero 2000), EUCR. San José, Costa Rica. pp. 27-46.

burguesía nacional, es apenas un acólito subsidiario. La apertura de estos espacios ha sido paulatina, iniciándose en 1985 con la venta de CODESA, y el desmantelamiento de los apoyos al sector agrícola no exportador, luego, a finales de la década con la apertura del sistema bancario nacional, y el creciente deterioro de los servicios universales, y como veremos, en el intento desde finales de la década del ochenta y a lo largo de los noventa, por la apertura de las instituciones autónomas del Estado.

Por último, la problemática del período desarrollista de endeudamiento crónico, como dijimos arriba, no ha sido superada. Acumulando no ya endeudamiento externo, sino interno. Pero, esta vez, el esquema no beneficia las posibilidades de asenso social de algunos de los sectores subalternos, sino que se limita a paliar las exclusiones más visibles y a intentar contener el descontento generado merced al proceso de empobrecimiento real de las capas medias, legado de la crisis. Es así como se ha vinculado la dinámica de los ciclos electorales con la movilización de recursos públicos, en aras de legitimar el sistema en los períodos de confrontación política intra-élites durante los dos decenios bajo estudio.²⁴

Las respuestas de los sectores subalternos a estas transformaciones han sido variadas, muchas veces manipuladas, merced a su división organizativa, y la negociación selectiva, jerarquizada y preferencial por parte del Estado con respecto a la particularización de los grupos gremiales, legado de la época de ilegalización de los sindicatos de izquierda durante el período desarrollista. Aunque, habría que decir que en general la persecución sindical sigue siendo una práctica tolerada, ergo fomentada, por el Estado costarricense.²⁵ Como veremos, sin embargo, luego de dos décadas de confrontación los sectores sociales han logrado desarrollar un discurso alternativo y coherente de resistencia frente a estos desafíos.

²⁴ Véase: Sojo, Carlos. Op.Cit. pp.43-51.

²⁵ El Estado no sólo ha violado repetidas veces los derechos sindicales, sino además los más básicos derechos humanos de asociación. Véase: Aguilar, Marielos. “Las restricciones de los derechos políticos de los costarricenses en la década de 1980.” En: *Revista de Ciencias Sociales* N° 67 (marzo 1995), EUCR. San José, Costa Rica. pp.45-54.

El universo simbólico: democracia formal y democracia social

La palabra clave que legitima todo el proceso socio-político es democracia, sin embargo, hay al menos dos grandes representaciones del concepto. En uno de los casos el concepto de democracia se utiliza para legitimar al discurso neoliberal, discurso presentado como técnico, apolítico, inevitable, entre otros. En efecto, los voceros oficiales, empresariales, y los grandes medios de comunicación parecen articular ciertos símbolos asociados a lo nacional alrededor de un discurso aperturista, el cual es asumido como inevitable, cuya negación se traduciría en perjuicios irreparables para el común.²⁶ Resulta evidente que democracia, en este esquema, es reducida a sus procedimientos formales.

Mientras, en el caso gremial hay una vinculación directa de democracia con un reclamado contenido social. Aunque, no es sino hasta 1995 que se consolida un discurso coherente frente al proceso global, especialmente frente a las instituciones del Estado. Es así como democracia nacional se llega a identificar con ciertas instituciones del Estado y con la defensa del orden constitucional del período desarrollista. En este ámbito aparece también la soberanía reivindicada. Alrededor del ICE dicho discurso nacional reivindicativo aparece de forma inmediata, como ha señalado Alvarenga, el ICE se logró convertir, legado del discurso desarrollista, en un símbolo nacional, el cual ha sido apropiado por los sectores subalternos en su confrontación con el Estado.²⁷ En dicho discurso, hay una identificación de soberanía, paz social, Estado democrático, con las instituciones del Estado.

Los llamados al diálogo se fundamentan en un concepto que ambos sectores entienden de forma disímil, a saber la democracia o en algunos casos paz social, para unos, sinónimo

²⁶ Para un análisis del discurso fatalista del neoliberalismo, véase: Hinkelammert, Franz. *Solidaridad o suicidio colectivo*. Ambientico Ediciones. Heredia, Costa Rica: 2003.

²⁷ Alvarenga, Patricia. Op. Cit. Cap.6. pp.263-298.

de orden, para otros, de justicia social. Ambos discursos comparten, sin embargo, elementos básicos. Los dos se manifiestan dentro del ideario de la modernidad: progreso, desarrollo, modernización, son símbolos aceptados y compartidos. Diálogo, democracia, y paz social, aparecen también en ambos, aunque con distintos significados, siendo democracia, como dijimos, el símbolo central. La sustancialidad de estas representaciones, sin embargo, puede ser cuestionada a partir de práctica política del propio poder, irrespetuoso generalmente de su propia simbólica; con el privilegio de tener los recursos para la difusión y producción masiva de su imaginario.

En efecto, será especialmente a partir de 1995, donde la ruptura de negociaciones y la aprobación de integra de la Ley sobre reformas de pensiones del magisterio, lo que cerrará las concesiones discursivas sobre la naturaleza abierta y democrática del gobierno. Llevando a los sectores magisteriales a una posición de desafío de los espacios tradicionales de legitimidad, descalificando el carácter democrático del gobierno. En efecto, en esa ocasión los voceros andinos señalaron:

*El pacto Figueres-Calderón significa un duro golpe a la Democracia costarricense y al establecimiento encubierto de una dictadura político-económica porque la Asamblea Legislativa ha perdido el control político que le impone el mandato popular.*²⁸

En efecto, en medio del descontento se genera un discurso que cuestiona la legitimidad misma de los espacios políticos, en este caso la Asamblea Legislativa, hecho que se profundizará cinco años después.

²⁸ La Voz de ANDE, agosto 1995. P.4. A la anterior conclusión también llegó Alvarenga. Ibíd.

Las coyunturas de conflicto social y el discurso de sus voceros sindicales

La primera coyuntura, en 1984, está marcada por los aún severos efectos de la crisis económica que se traducen entre la población asalariada en un deterioro sensible de su capacidad adquisitiva. Resulta central en el proceso de movilización, convocado para el primero de febrero de ese año, la visión de que los efectos de la crisis han golpeado de forma desigual a los distintos grupos sociales. En efecto, los sectores magisteriales arguyen una confabulación entre los sectores empresariales, que se beneficiarían de la especulación rampante y del Gobierno. De ahí que la ANDE desde dos años antes venga señalando simplemente que:

“...en las actuales circunstancias, cumple su misión histórica y defiende al pueblo, y [que] lo está defendiendo del “paredón del hambre” al que lo quieren llevar los inescrupulosos y los insaciables, porque –volviendo a Martí- “la patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie”²⁹

De ahí la aguda crítica de los sectores magisteriales para con la política económica impulsada por el gobierno de Luís Alberto Monge (1982-1986), la cual ven, con gran acierto, como una imposición de los organismos financieros internacionales.³⁰ Asimismo, la organización magisterial vincula la problemática social de este período con el descalabro del universo agrícola hasta hace poco apoyado por instituciones autónomas.³¹ Si bien recurren a un discurso historiográfico tradicional,³² sus intentos por vincularse

²⁹

La Voz de Ande, julio 1982. p.2.

³⁰ Ibíd. p.8.

³¹ Edelman, Marc. Op.Cit. El autor señala como el discurso tradicional sobre la mítica democracia rural fue muchas veces reapropiado por los sectores subalternos para la movilización de protesta.

³² Así por ejemplo, la ANDE organizó un “Seminario Nacional Sobre Tenencia de la Tierra”, en octubre de 1983, donde declararon que, en el aspecto histórico: “El país no derivó fenómeno de concentración de tierras, de explotación de minerales preciosos por vía de instituciones esclavizantes tipo encomienda, cómo ocurrió en otros ámbitos latinoamericanos y durante la época de conquista y de la Colonia...Antes bien, en nuestro país permanece un verdadero régimen de democracia rural, que liga

con, el que quizá fue el movimiento social más combativo de la década, resulta meritorio en términos de construcción de alternativas frente al proceso de ajuste. Igual apertura se tuvo con la Coordinadora Nacional de Lucha por la Vivienda Digna, dado el crónico problema habitacional, agudizado por la crisis, que se relacionaba directamente con la problemática campesina.³³

Efectivamente, entre el pliego de peticiones lanzadas al gobierno por la totalidad de organizaciones sociales que confluyeron ese primero de febrero estaban: la reducción de los impuestos a la canasta básica, una posición más digna frente al FMI, una repartición más equitativa de los efectos de la crisis; se manifiestan además contra el Proyecto de Ley de Emergencia, que buscaba aumentar los precios de varios productos para paliar los desordenes presupuestarios, y contra el recorte en los presupuestos del Programa de Beneficio Social, denunciaron además, que el Gobierno no pagaba sus deudas salariales, principal reclamo magisterial, y le solicitaron a los personeros del mismo tener “decencia nacional”; lanzaron, además, una aguda crítica a la sub y sobre facturación de las grandes empresas en perjuicio del fisco; debido a un reciente desfalco fiscal por parte por varios millones de cólonos en una coyuntura de carestía generalizada.³⁴

Asimismo, la negociación con otras fuerzas sindicales resultó importante en el desarrollo del conflicto. La izquierda, mediante su medio de prensa “Libertad”, mostró una gran apertura hacia organizaciones, que como la ANDE, no estuvieron tradicionalmente vinculadas con ella, aunque ya hacia marzo la negociación que emprende la ANDE de forma aislada con el gobierno llevan a la condena de ésta por parte de otras fuerzas sindicales.³⁵ En este sentido, la organización se beneficio de una política de incorporación

íntimamente al hombre con su tierra, en un régimen de detentación de pequeña y mediana propiedad, que así prevalece antes del desarrollo del cultivo del café.” La Voz de Ande, noviembre 1983. p.22.

³³ La Voz de Ande, noviembre 1984. p.27.

³⁴ La República, jueves 2 de febrero de 1984. p.2

³⁵ Véase: Libertad, del 6 al 12 de enero de 1984, Libertad, del 3 al 9 de febrero de 1984 y Libertad, del 1 al 7 de marzo de 1984, en este último número se dice que: “*Las organizaciones del Frente Magisterial, APSE, SEC, SINATO y ASEM, consideran desleal y entreguista la actitud de*

restrictiva, jerárquica y diferencial por parte del Estado. Dado que la ANDE fue uno de los sindicatos no perseguidos durante el período de hegemonía liberacionista, y producto de lo anterior, era la organización con mayor número de afiliados, contaba con la anuencia oficial para la negociación. Como veremos, lo anterior no se revertirá hasta la firma del Pacto Figueres-Calderón en 1995.

A pesar de lo anterior las organizaciones gremiales, lo cual resulta particularmente claro en el caso de ANDE, no lograron crear un discurso coherente frente a la transformación institucional que se gestaba al interior del Estado costarricense. De esta forma, algunos reclamos se asumían sin una visión institucional estratégica, respondiendo a la inmediatez apremiante de la crisis. Es así como los voceros de ANDE lanzan, un año antes de su cierre, agudas críticas al Consejo Nacional de Producción (CNP), institución otrora encargada de fijar los precios de consumo alimentario básicos, como respuesta a la espiral inflacionaria de la época. En este sentido, se plantea que el CNP transfiere sus pérdidas a la clase trabajadora, si bien no piden su cierre, que fue el resultado del acuerdo del Gobierno con los organismos internacionales para la firma del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), el rechazo y desprestigio para con la institución no lograron conformar una visión que logrará asumir la importancia del CNP dentro del esquema productivo global.³⁶ Esta visión institucional no se alcanzará tampoco hasta la huelga de 1995.

En los distintos sectores sociales se encuentra presente el rechazo al aumento del costo de la vida producto de la crisis. De esta forma en el periódico Libertad se vincula democracia con justicia social y paz, además del rechazo a las políticas de los organismos internacionales; en este sentido su discurso no se aleja del de las organizaciones

ANDE...Manifiestan que la ANDE se retiró unilateralmente del Frente Magisterial y que por tanto no puede arrogarse la representación del magisterio y mucho menos de todos los empleados públicos.”

³⁶ La Voz de ANDE, Abril 1984. p.3.

magisteriales no comunistas, y se acepta un umbral desarrollista como eje articulador de la protesta.³⁷

Finalmente, durante la citada marcha del 1º de Febrero de 1984, la entonces presidenta del Frente Democrático de los Trabajadores (FDT), Lilliam Mora Blanco, articula todos los elementos hasta ahora esbozados, y señalando los efectos desiguales de la crisis dice:

“...este desbalance está amenazando gravemente a nuestra democracia, porque tiende a convertirla en una democracia de la ficción y el engaño, en algo así como una democracia formal, en cuya entraña el pueblo ni vive la soberanía, ni vive la dignidad, ni alienta la justicia social y económica, de manera que su destino superior no está en sus propias manos –como deber ser- ni en su propia lucha. Y esto debe terminar: Queremos la democracia real, aquella que no es teoría sino práctica viva, demostración concreta, realidad nacional.”³⁸

Durante la convulsa década, el descalabro de la izquierda merced a su división interna, el rechazo a la política guerrerista impulsada por los sectores empresariales más conspicuos por el Gobierno de Monge, llevan a la definición de un universo discursivo donde la paz se asume como un valor nacional a defender, aún por parte de un sector importante de la izquierda revolucionaria.³⁹ Como hemos señalado, este ideario de paz se reproducirá a lo largo de los dos decenios bajo estudio.

³⁷ Al respecto, en su editorial, el periódico señala: *“El Gobierno está cediendo en esta materia incluso más allá de lo previsible. Los sectores democráticos del partido gubernamental por lo visto son conscientes de los peligros, pero carecen del coraje y la voluntad política para presentar una resistencia eficaz, que vaya más allá de las palabras y los discursos. A la larga estos proyectos económicos y sociales también socavarían la política de paz y de neutralidad. Cuanto más reducido sea el espacio de resistencia a la política económica del FMI y de la AID, más estrecho será también el campo de maniobra para enfrentar la política de guerra de la Administración Reagan hacia los pueblos de Centroamérica.*

La paz y la democracia son incompatibles con situaciones extremas de hambre e injusticia. El Nepito es a la paz lo que el Viceministro Chacón es a la neutralidad. Es pretender mezclar agua con aceite. En este caso el Nepito es echar aceite que podría terminar incendiando el país. Claro que se equivocan los tagarotes que creen que las llamas sólo alcanzarán los hogares de la gente humilde y trabajadora.” Libertad, del 25 al 31 de mayo de 1984. Igual rechazo aparece en el Semanario Universidad. Véase: Semanario Universidad, del 13 al 19 de julio e 1984.

³⁸ La Voz de Ande, Febrero 1984. p.8.

³⁹ Libertad, del 11 al 17 de mayo de 1984.

En la segunda coyuntura, en septiembre de 1989, la protesta por el alza de los precios de los productos sigue teniendo vigencia. Así lo confirma la recurrencia con la que aún se denunciaron las alzas.⁴⁰ A raíz del deterioro de los salarios en términos reales sufrido a lo largo de la década, diversas organizaciones magisteriales se agrupan en el Consejo Intermagistral Asociado, CIMA, donde se solicita no sólo el aumento salarial para los docentes, sino que se pide además una serie de mejoras urgentes a la infraestructura educativa. Entre las agrupaciones que conformaban el CIMA estaban: ANDE, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Sindicato Nacional de Profesores (SINAPRO), Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) y el Colegio de Licenciados y Profesores.⁴¹ Asimismo, la organización busca defender las preocupantes aproximaciones del Estado para con el régimen de pensiones del magisterio. El cual, al tener cargo en el presupuesto nacional, es uno de los rubros que desde mediados de la década ha intentado ser recortados por parte del Estado.

La ANDE convocó a un paro nacional para el 17 de marzo de ese año, argumentando que la Caja Costarricense del Seguro Social estaba restringiendo las incapacidades de los maestros de forma arbitraria, contrariando la Ley de Carrera Docente que cubría a los maestros con incapacidad en caso de enfermedades que pudieran afectar su desempeño docente.⁴² La ANDE hace un llamado al CIMA para su incorporación al movimiento. Luego, según la organización andina, el poco apoyo recibido por parte de la última la lleva a retirarse del CIMA.⁴³ Sin embargo, esta retirada le permitirá a la ANDE negociar un incremento salarial al margen del resto de las organizaciones, por lo que los reclamos de incremento salarial antes solicitados serán desatendidos por el Gobierno de Arias Sánchez y el entonces Ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco. Frente a lo anterior la ANDE arguyó que:

⁴⁰ Véase: La Voz de ANDE, Octubre 1988. p.4. Y: La Voz de ANDE, Febrero 1989. pp.4,5,13.

⁴¹ La Voz de ANDE, Marzo 1989. p.4.

⁴² *Ibíd.* p.5.

⁴³ La Voz de ANDE, Abril 1989. p.3.

“Desde 1986 hemos venido dialogando con los personeros del Gobierno de la República con una actitud leal y honesta con firmeza e hidalguía. Esto nos ha permitido entregarle al Magisterio logros muy importantes como el pago de anualidades a los educadores que estén nombrados en forma interina o aumentos salariales a la base; revalorizaciones por vía excepción en forma constante, independiente del costo de la vida.”⁴⁴

Por lo que:

“La ANDE no participará en este momento en ningún movimiento de presión, pues estamos negociando plenamente.”⁴⁵

En septiembre el CIMA convoca a una huelga nacional para reclamar un mayor aumento, presionar contra las propuestas que atentan contra el régimen de pensiones y exigir mejoras en la infraestructura educativa. La huelga se inicia el 5 de septiembre y un día después el Gobierno, aprovechando la desunión del movimiento magisterial, emprende una política de amenazas con despidos, un posible cierre del ciclo lectivo, entre otros. Con este movimiento converge un paro convocado por los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), solicitando un ajuste salarial.⁴⁶ Al mismo tiempo, el periódico La Nación emprende una campaña en la que acusa al régimen de pensiones del magisterio como uno de abusos y privilegios.⁴⁷

La ANDE buscará, al tiempo que defiende el régimen de pensiones, distanciarse de los movimientos de protesta. En efecto, frente a Julio Rodríguez los voceros andinos aducirán defender no privilegios sino los más altos valores nacionales, al respecto le señalaron que:

“La ANDE no desea destruir a nuestra Patria. No conoce usted la trayectoria de nuestra organización, y todo lo que hemos hecho por nuestro país.”

⁴⁴ La Voz de ANDE, Julio 1989. p.2.

⁴⁵ *Ibid.*, p.2.

⁴⁶ Véase: La Nación, lunes 4 de septiembre de 1989. p.4A. La Nación, martes 5 de septiembre de 1989. p.4A. La Nación, miércoles 5 de septiembre de 1989. p.4A.

⁴⁷ La Nación, lunes 4 de septiembre de 1989. p.5A. La Nación, miércoles 5 de septiembre de 1989. p.14A.

Ojalá los medios de comunicación adopten posiciones más consecuentes con la angustia de las clases más necesitadas, pues así se mantendrá el equilibrio y el consenso que permitirá una sociedad más justa... nuestro mayor esfuerzo está centrado en rescatar y consolidar las concepciones propias de nuestra civilidad, libertad, paz y justicia social.”⁴⁸

Nuevamente, en el lenguaje de protesta se reivindican los valores tradicionales de la imaginada nación; vinculando paz con justicia social y democracia; y, como lo hará el CIMA y los empleados del MOPT, dicha vinculación se hace contra la política emanada por los organismos financieros internacionales, en el marco del recién aprobado PAE II.⁴⁹ A mediados de septiembre los empleados del MOPT alcanzan varias de las peticiones planteadas al Gobierno en relación a los ajustes salariales, en una entrevista reproducida en el Semanario Universidad el dirigente Harbolte se refiere a las causas del movimiento señalando que:

“Los partícipes de este movimiento son básicamente, seguidores del Partido Liberación Nacional que conforman, según Harbolte, esa clase media tan lacerada actualmente. Para Harbolte, el gobierno debió mantener un equilibrio entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional y los sacrificios que le pedía a la clase media. El surgimiento de estos conflictos [-dijo] se da por cumplir los acuerdos con el FMI, y mientras se continúe con esta política no se podrán aplacar estas convulsiones sociales.”⁵⁰

Luego de tres semanas el movimiento magisterial logra algunos compromisos con el Gobierno, sobretodo se revierten los despidos y las sanciones salariales. En términos del aumento propuesto no se alcanza el resultado perseguido, sin embargo, los voceros sindicales de los educadores señalan algunos logros como: el reconocimiento del educador como profesional, se integró una comisión que analizaría las implicaciones técnico-administrativas de este reconocimiento, el compromiso del Gobierno para aportar 4 millones a Congreso Pedagógico para febrero de 1990, el pago a la base para pensionados por incremento en costo de la vida, el compromiso de buscar recursos para

⁴⁸ La Nación, martes 5 de septiembre de 1989. p.16A.

⁴⁹ Libertad, 7 de septiembre de 1989. p.4.

⁵⁰ Semanario Universidad, 15 de septiembre de 1989.p.14.

comedores escolares, el reconocimiento de anualidades pendientes a maestros en propiedad e interinos, que los educadores se reincorporarán a puestos y no sufrirán sanciones disciplinarias, tampoco los estudiantes.⁵¹

El episodio, sin embargo, marca profundas divisiones entre las organizaciones magisteriales. El periódico Libertad anuncia la “derrota histórica” de la ANDE, y se afirma la desafiliación de varios miembros a favor de otras organizaciones.⁵² La ANDE misma acusará a sus homólogas de ofensas verbales, e invitará a sus antiguos asociados a reintegrarse a la Asociación.⁵³ Asimismo, habría que destacar la reproducción dentro de su órgano de información, de las opiniones de sectores tradicionalmente opuestos a las reivindicaciones magisteriales, haciendo eco de la supuesta civilidad de la ANDE frente a otros grupos, citándose ampliamente a columnistas de La Nación.⁵⁴ El llamado hacia otras organizaciones para la defensa del régimen de pensiones no se pudo haber hecho en un momento de mayor tirantez.

La posición de la ANDE ante el proceso electoral en curso, para la elección del gobierno de 1990-1994, revela una clara regresión de la visión de los voceros gremiales en términos de su percepción del cambio social global. En efecto, en alianza con la Comisión Nacional de Rescate de Valores Morales, Cívicos y Religiosos, la ANDE llama a una campaña respetuosa en aras de un moralismo poco coherente con sus posiciones anteriores. Asimismo, en el Congreso 47 de la ANDE, esta postura moralista se sostiene para explicar la crisis educativa y social que atribula al país durante la década, de ahí que señalen como:

“Encontramos que los educadores en este momento no han comprendido su rol en nuestra sociedad ya que se está viviendo en estos momentos en una época de crisis en cuanto a valores cívicos, morales, espirituales e intelectuales.

⁵¹ Libertad, 29 de septiembre de 1989. p.2.

⁵² Libertad, 21 de septiembre de 1989. p.2.

⁵³ LA Voz de ANDE, Octubre 1989. p.2.

⁵⁴ *Ibíd.* pp.8-9.

En el aspecto formativo, la crisis se acentúa en el faltante de maestros. Hacen falta las escuelas formadoras de educadores [sic], en las que se daba una formación eficiente, para desempeñar, con ideonidad y mística la labor docente, logrando, así con estas bases un desarrollo integral a los educandos. La figura del maestro se ha deteriorado debido a las ideologías extremistas que proliferan sobretudo en las altas esferas del ambiente socio-cultural que nos rodea (moda, vocabulario, vicios, influencia de culturas foráneas, etc.) y no se ha preocupado por levantar su imagen en la comunidad que sirve como educador.”⁵⁵

Todo lo anteriormente expuesto confirma la falta de coherencia y sistematización del discurso de resistencia frente al proceso global de transformación social. Asimismo, el carácter selectivo, jerárquico y diferencial de la negociación estatal frente a las distintas organizaciones laborales queda también manifiesto. El discurso antedicho muestra un regreso en términos de coherencia con la dinámica misma de cambio que un sector de la dirigencia magisterial manifestó.

La tercera coyuntura, entre marzo y agosto de 1995, cuyo punto culminante fue la Huelga Nacional del Magisterio del 95 en julio del mismo año, se enmarcó en una dinámica de lucha donde diversos sectores de sociales se vieron enfrentados al proceso de reorientación neoliberal de la economía nacional traducido en la aprobación del PAE III ese año.

Aquel año fue de contracción económica, de movilidad laboral, proceso de reingeniería dentro del Estado y de pérdida de legitimidad significativa por parte de los partidos políticos tradicionales. La huelga que analizamos no contribuyó poco en este último aspecto. Además, en medio de las manifestaciones de descontento se dieron entre 1994 y 1995, serios escándalos que cuestionaron de forma profunda a la “clase política”: el cierre del Banco Anglo en el 94, el escándalo por Millicom en el 95, entre otros. Al menos, así parecieron apreciarlo los costarricenses, quienes en una encuesta de Unimer publicada en mayo de ese año se mostraron profundamente disconformes.⁵⁶

⁵⁵ La Voz de ANDE, noviembre 1989. p.14.

⁵⁶ Llama la atención que 53,1% señaló que la administración Figueres Olsen no tenía ningún logro. Un 76% dijo que Figueres incumplía las promesas, lo que no resulta extraño ya que basó su campaña en un

Desde marzo de ese año diversos grupos sociales se habían enfrentado al Gobierno. El 31 de marzo un paro Magisterial y una amenaza de huelga para abril empujó al Gobierno a retirar de la corriente legislativa el Proyecto de Ley de Proyecto de ley de Normalización y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, proyecto que finalmente sería aprobado a pesar de las manifestaciones de repudio popular. La Reforma contemplaba la pérdida de algunos de los derechos que consignaba la Ley para las pensiones y jubilaciones de los profesores. La época, sin embargo, estuvo marcada por una plétora de movimientos de repudio a la política económica del gobierno.

57

En efecto, en mayo de ese año la lucha contra la instalación ilegal de la telefonía celular de la transnacional Millicom ya presenta al ICE como una institución nacional-popular. Institución a la que se asocian valores como democracia, paz, justicia social, independencia y soberanía.⁵⁸ Este discurso será retomada por los maestros luego del fracaso de las negociaciones, esta vez para articular un movimiento nacional en rechazo a la modificación del régimen de pensiones del magisterio.

supuesto rechazo al PAE III y al neoliberalismo. Resulta revelador que de los entrevistados, como principal logro que pudieran recordar de la administración, la calificación más alta la tuvo la casilla de “otros” con un 15,9% seguido por “no sabe/no responde” con un 14, 1%. La Nación, lunes 12 de mayo 1995. p. 4.A y 5.A

⁵⁷ El Banco de Costa Rica estuvo en paro el 7 de abril, así como el Instituto de Desarrollo Agrícola. La Central Permanente de Trabajadores así como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) fueron a paro el 24 de abril, como protesta hacia las medidas económicas del Gobierno, además amenazó con ir a huelga el 9 y 10 de mayo. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo del Atlántico y Hospital Tony Facio fueron a huelga el 25 de abril. La Imprenta Nacional mantuvo un paro del 22 al 28 de abril, y los trabajadores de Acueductos y Alcantarillados se mantuvieron en huelga del 2 al 8 de mayo. Asimismo, los empleados del ICE iniciaron una huelga el 8 de mayo que finalizaría diez días después con el retiro de la transnacional Millicom del país. En este caso, los empleados del ICE libraron una lucha frontal contra los sectores político-empresariales quienes defendieron un contrato para la comercialización de celulares que era anticonstitucional. La Nación, Lunes 15 de mayo 1995. p. 4.A

⁵⁸ Por ejemplo, uno de los dirigentes sindicales del ICE afirmó: “*En lo que toca a la definición del futuro del ICE debemos acotar que nunca nos hemos opuesto a la renovación o reforma... Cuáles son los excesos en que hemos incurrido las organizaciones del ICE al pedir respeto a nuestra soberanía e independencia, para que se deje trabajar a nuestra institución...*” La Nación, jueves 1 de junio 1995. p.14.A. También se dijo que: “*...para detener el saqueo de la nación y de sus estratégicas riquezas...Llamamos a todo el pueblo costarricense a rebelarse contra la imposición extranjera que pretenda someternos al capital foráneo y nacional, al procurar apropiarse de empresas nacionales...Este llamado se hace extensivo a todas las fuerzas organizadoras, dado que está en juego no solamente el ICE, sino todas las instituciones que responden al más caro interés nacional...*” Semanario Universidad, 19 al 27 de mayo 1995. p.4.

La opinión oficial y antagónica de los sectores oficiales fue expresada por la Cámara de exportadores costarricenses (CADEXCO), en la coyuntura de la lucha contra Millicom, que llamó a encontrar una solución rápida al problema surgido con la empresa, debido a las serias consecuencias que podían derivar de posibles sanciones de los Estados Unidos en el campo comercial.⁵⁹

Algunos días después uno de los lectores del periódico “Semnario Universidad” manifestaba en una carta titulada “La Soberanía y el Pueblo”, que:

“Fue muy valiente y patriótica la lucha de los empleados del Inst. Costarricense de Electricidad (ICE) contra las pretensiones de la transnacional Millicom...los trabajadores han demostrado con su sólida organización, conciencia de clase y decoro nacional, que la defensa de la soberanía reside únicamente en las manos del pueblo y no en los políticos de turno. Ya lo experimentaron hace 25 años con ALCOA. Hemos heredado a nuestros hijos – que son el futuro de la patria – una nación llena de valentía y esperanza en un marco de paz y respeto.”⁶⁰

Cabe destacar cómo el autor del fragmento citado vinculó la reciente experiencia reivindicativa con la memoria. Asimismo, el lector reintroduce un elemento simbólico recurrente: la paz. En efecto, el pueblo que defiende la soberanía y el decoro nacional forja un marco de paz y respeto. En este sentido, instituciones del Estado equivalen a marcos que garantizan la paz, en la medida en que su defensa es la defensa de la soberanía y el decoro nacional, siendo estos últimos elementos forjadores de un marco de paz, esta paz esta dada, asimismo, por el respeto a la opinión de los diversos sectores sociales, los cuales, como vimos, fueron separados de las esferas de poder por un acuerdo de cúpula; resemantizado, así la representación del supuesto ser nacional construido desde el poder, a saber el carácter pacífico del costarricense. Seguramente, el slogan

⁵⁹ Semnario Universidad, 19 al 27 de mayo 1995. p.4.

⁶⁰ Semnario Universidad, 19 al 27 de mayo 1995. p.27.

acuñado por SINDEU en este período no caía en oídos sordos: “*Defendiendo la Seguridad Social–Defendemos la Soberanía Nacional*”.⁶¹

Por su parte los educadores utilizaron los elementos del discurso nacional costarricense. En una primera etapa dichos elementos se reducían a aquellos que los señalaban directamente, y estaban relacionados con los mitos que les habían sido asignados por el discurso oficial, aunque se apropiaban de esos elementos para reivindicar su régimen de pensiones amenazado. Sin embargo, el carácter gremial de la representación nacional esbozada limitaba lo llamativo del discurso en aras de una posible incorporación de otros sectores;⁶² la cual se dará de forma limitada hasta la ruptura de negociaciones con el Gobierno. Hasta ahora fija el discurso dentro de lo aceptable para el poder: el mito de una Costa Rica educada y pacífica; discurso finalmente transgredido, al romper el Gobierno el diálogo con los sectores magisteriales.⁶³

En el caso de los maestros la vinculación entre todos estos elementos se produce hasta luego de la ruptura de las negociaciones con el gobierno. En la siguiente cita, sin embargo, vemos como aún antes de la ruptura antedicha no se construye un discurso coherente con respecto a las instituciones del Estado, de esta forma, si bien se reivindica la lucha contra los organismos internacionales, el Estado es a su vez condenado. Al respecto señalaron:

“Que no se trata de lirismos ni de eufemismos que solo se dicen en los discursos oficiales a nivel internacional, se trata de una realidad que el pueblo costarricense sabe y conoce de sobra: si no fuera [por] el educador costarricense hubiéramos sido víctimas desde hace tiempo de crisis similares de carácter bíblico, político y socioeconómico a las sucedidas en otros países latinoamericanos.

No pueden ni deben nuestros gobernantes de turno desconocer sus obligaciones consagradas en la Carta Magna, en cuanto a garantías sociales del trabajador de la educación. Si bien actúan como <<siervos menguados>> al servicio del

⁶¹ Semanario Universidad, 2 al 8 de junio 1995. P.19.

⁶² Alvarenga, Patricia. Op. Cit. Cap.6. pp.263-298.

⁶³ La Nación, lunes 5 de junio 1995. P.18.A.

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de las corrientes neoliberales en boga, no tenemos por que ser los educadores los <<chivos expiatorios>> que vengamos a la postre a pagar los <<platos rotos>> por culpa de un Estado costarricense hipertrofiado...”⁶⁴

Contraste notable, con las postrimerías de la ruptura, donde vinculan su lucha con la de los trabajadores del ICE contra Millicom, y señalan que ellos necesariamente son los defensores del orden constitucional legal.⁶⁵

El proceso de ruptura se inició 18 de abril el Presidente de la República José María Figueres, y el ex-presidente Rafael Ángel Calderón, firmaron el denominado “Pacto Patriótico”, donde el Gobierno se comprometía a impulsar en conjunto una serie de leyes que profundizarían el proceso de reestructuración del Estado. Ese mismo día en el Ministro de Trabajo, Farid Ayales, firmaba un acuerdo con el Frente Magisterial, mediante el cual se comprometían a negociar el Proyecto de Reforma de Pensiones.⁶⁶

El 31 de mayo los maestros protagonizaron un nuevo paro, en el que desfilaron cerca de 35000 educadores por San José, para buscar acuerdos con respecto al mentado Proyecto de Ley. Al mismo tiempo el Gobierno emprendía negociaciones paralelas con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Cabe destacar que las bases para la negociación habían sido sentadas por el PUSC el mismo día en que los maestros desfilaban por San José. En efecto, en la reunión de Puerto Carrillo el PUSC señaló buscar elevar un plan de “garantías económicas” a nivel constitucional, así como frenar los llamados “disparadores del gasto”, para cualquier negociación de nuevos tributos con el

⁶⁴ La Voz de ANDE, junio 1995. P.5.

⁶⁵ En esa ocasión señalaron: “*De todo lo anterior se colige, necesariamente, que la reivindicación del Magisterio Nacional por su régimen de pensiones, al igual que la lucha reciente de servidores del ICE, constituye una demanda por el respeto del orden constitucional legal...*” La Voz de ANDE, junio 1995. P.9.

⁶⁶ Cabe destacar que muchos de los personajes que participaron en ambas coyunturas, Calderón Furnier, Figueres Olsen, Miguel Á. Rodríguez, Ayales, entre otros, han sido seriamente cuestionados por actos de corrupción, algunos incluso, descontaron prisión preventiva recientemente. Otro protagonista en la coyuntura, firmante del Pacto de Puerto Carrillo, Miguel Ángel Rodríguez, no escapa a la tónica.

Gobierno.⁶⁷ El lunes 12 de junio gobierno y PUSC llegaban a un entendimiento, donde acordaban básicamente que el PUSC no obstruiría el paquete fiscal que el gobierno impulsaba a cambio de reducir los “disparadores”; por lo que el gobierno se comprometió a varias reformas para disminuir gastos en el sector público y a darle un trámite expedito al Proyecto de Ley de Normalización y Sostenibilidad que afectaba las pensiones magisteriales.⁶⁸

El acuerdo generó serias dudas en el seno del PLN, entonces gobernante, y encontró un fuerte repudio por parte de dirigentes sociales de diversos sectores. En efecto, uno de los puntos del acuerdo obligaba al gobierno a resolver el asunto de las pensiones con los sectores magisteriales en un corto tiempo. Asimismo, diversos sectores asumieron que el acuerdo sellaba los espacios de diálogo y participación, creando un monólogo entre los dos partidos mayoritarios, ambos tachados de neoliberales.

Luego de varios meses de negociación se anunciaron a finales de junio, ciertos acuerdos entre el gobierno y los maestros. Sin embargo, el martes 30 de junio los entes magisteriales y el gobierno rompieron las negociaciones. Rápidamente el gobierno se propuso cumplir lo pactado con el PUSC y el 5 de julio mandó el Proyecto de Ley de Reforma al Régimen de Pensiones intacto, sin incluir nada de lo negociado. De forma enérgica diversos sectores sociales se unieron al magisterio. La CPT y la ANEP coordinaron la formación de un Comité Cívico Nacional, al que se unió la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), así como varios grupos magisteriales, entre ellos APSE, SEC, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y estudiantes universitarios, entre otros.

Como hemos venido sosteniendo la ruptura de los canales de negociación del Estado frente a las diversas organizaciones terminó por articular a los distintos grupos. A nivel

⁶⁷ La Nación, jueves 1 de junio. P. 4A y 5A.

⁶⁸ La Nación, martes 13 de junio.

discursivo se presente un discurso alternativo coherente ahora con una visión estratégica institucional.

Se llamó a una “huelga de brazos caídos” convocada para el 17 de julio, la que movilizó a gran cantidad de empleados públicos y diversos sectores sociales. Los educadores se mantuvieron en huelga 31 días, con lecciones suspendidas, participando en frecuentes marchas, sin embargo, el Gobierno desconoció el clamor popular, y luego de 31 días de huelgas los maestros retornaron a las aulas con sanciones salariales.

En julio, luego del fracaso de las negociaciones, los educadores se unen con otros gremios para repudiar la política económica de la administración. En “La Voz de ANDE” se reproduce el acuerdo mediante el cual se descalifica el accionar político del gobierno, en dicho documento vemos como ya se presentan de forma clara todos los elementos hasta ahora analizados. Se asocia el Pacto Figueres-Calderón con prácticas políticas lesivas, excluyentes, se reivindica el Estado, pero un Estado que además de Derecho es Social.⁶⁹

Finalmente el Magisterio firma su propio “Pacto Patriótico” con otras organizaciones sociales como la ANEP y el CPT. En dicho documento la asociación paz-democracia-Estado Social de Derecho es clara, siendo la defensa de estos elementos un acto legítimo de defensa nacional, donde considerando que:

⁶⁹ “...debido a que el Magisterio Costarricense no ha escapado al fenómeno de la globalización que imponen los gobiernos neoliberales, donde se reúnen los partidos mayoritarios y firman un pacto netamente unilateral, sin consultar a la sociedad civil, en el cual pretenden y han llevado a la práctica algunos de los siguientes proyectos nefastos que atentan contra la clase trabajadora, entre ellos:

1. Desmantelamiento del Estado Social de Derecho
2. Reformas constitucionales, sin consultar al pueblo para instaurar un capítulo de garantías financieras dando una política económica de puertas abiertas a los mercados internacionales, el cual permitirá que los sectores más desposeídos se empobrezcan más cada día.
3. Instauración de una Tercera República neoliberal con el Pacto Figueres-Calderón.
4. Desaparición de las organizaciones sindicales al producirse la reforma del Estado con la venta de activos y de servicios estratégicos.
5. Privatización de la Banca Nacionalizada.
6. Privatización de los Regímenes de Seguridad Social. La Voz de ANDE, agosto 1995. P.3.

“1. Costa Rica se ha forjado a través de su historia una Paz, una Libertad y una Democracia, que permitió el desarrollo de un Estado Social de Derecho.

2. Hoy día lo social ha sido desplazado por contenidos económicos que deterioran las conquistas sociales, creando una desestabilización e incertidumbre nacional.

4. El pacto Figueres-Calderón significa un duro golpe a la Democracia costarricense y al establecimiento encubierto de una dictadura político-económica porque la Asamblea Legislativa ha perdido el control político que le impone el mandato popular.” Por lo que unirán “...esfuerzos hacia LA LUCHA PATRIÓTICA NACIONAL...”⁷⁰

Recapitulando, los elementos simbólicos claves en el discurso de los maestros son democracia, paz y educación; su vinculación conlleva la asociación de la democracia con un contenido social, en este caso parcial y/o fragmentario, al principio muy vinculado a la representación que el poder mismo les ha asignado. Al final del período, su vinculación con otros sectores llevan a la ampliación de los elementos simbólicos, en este caso los contenidos sociales son explicitados y se apela a un Estado Social de Derecho. Asimismo el espacio formal de la democracia es acusado de ilegítimo al violentar el supuesto contenido social/inclusivo de la democracia costarricense y al violentarse el espacio de negociación.

Esta vinculación estratégica de los maestros frente al fracaso del diálogo con el gobierno y la convocatoria de otros sectores supera la fragmentación discursiva inicial, al menos su carácter localizado, apelando a la constitución de un actor superior, forjado en el marco de la lucha social. En este sentido se forja un sujeto popular a partir de experiencias de lucha reivindicativa, el cual se mantendrá y aparecerá más rápida y claramente en la siguiente coyuntura.

Estos elementos reaparecen en la coyuntura del “Combo” Energético, allí los sectores populares, o sus voceros, siguen vinculando democracia con paz social, cuya defensa constituye un acto de defensa de la soberanía frente intereses espurios que quieren “vender el país”. Al final de la coyuntura se muestra latente un nuevo actor identitario, la

⁷⁰ La Voz de ANDE, agosto 1995. P.4. Mayúsculas son de ellos.

clase media, la cual se asume sin embargo de forma implícita, se señala en términos negativos, por exclusión, y no como un actor positivo; lo no dicho en el discurso revela, sin embargo, lo que se sobreentiende, lo que no necesita señalarse, la clase media se esgrime con naturalidad pasmosa, denotando su historicidad concreta como capa media, y su no historización por parte de los grupos subalternos.

En este último caso el discurso nacional que configuran los sectores populares este se muestra más temprano y más estructurado. Hay una relación democracia-Estado-bienestar o paz social que se entiende como lo costarricense. Asimismo frente a la argumentación de los sectores dominantes de igualar democracia al apego a normas institucionales, como vimos con sesgos autoritarios, los sectores populares manifiestan principios contractuales sobre los que se cimentaría la democracia. Es así como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica como respuesta a un editorial de La Nación manifiestan:

“Sobre el orden de las cosas, se hace necesario refrescar la memoria: el pueblo es soberano y los gobernantes son servidores del pueblo que los eligió. El Gobierno y los diputados que aprobaron en la noche el “combo” han ignorado el clamor popular, que crece desde todos los rincones del país y que rechaza frontalmente sus acciones...El pueblo está en las calles como respuesta a la sordera y la violencia de los que detentan temporalmente el poder del Estado costarricense...Nos oponemos al “combo” porque pretende fragmentar al ICE, debilitando su participación en el desarrollo nacional como institución que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, junto a otras instituciones como la Caja y la educación pública en todos sus niveles, pilares fundamentales de la paz social que disfrutamos todos los costarricenses...Similar a lo ocurrido con el Pacto Figueres-Calderón, con el “combo” se repite el estilo de acuerdo bipartidista para aprobar proyectos que tocan intereses y recursos nacionales, de una forma apresurada y poco transparente.”⁷¹

La asociación que hacían en la coyuntura anterior entre Estado y bienestar se muestra nuevamente. Asimismo, las referencias a un legado “histórico” un patrimonio del pueblo

⁷¹ La Nación, domingo 26 de marzo 2000. P.14.A.

se presenta constantemente. La categoría pueblo en este sentido resulta fundamental para denotar la auto-afirmación de los sectores sociales en contra de las cúpulas de poder. Esta exclusión configura una representación de los sectores sociales como distintos y opuestos a los intereses político-empresariales, ergo apuntalando el proceso reseñado de formación de sujeto. La asociación antedicha resulta clara en la declaración que realizó el Consejo Nacional de Cooperativas (CANACOOOP):

“Los activos del Estado son bienes que pertenecen a todos los costarricenses y se han construido con el aporte, el sudor y el esfuerzo constante de la Nación. Por esto, la disposición de estos bienes o las acciones que de alguna manera pongan en riesgo, como ocurre con el Proyecto de Ley que ahora tiene en vilo a toda la ciudadanía, deben respaldarse en el más sólido y amplio consenso de las diversas fuerzas sociales y políticas del país, lo que como es evidente, no ocurre ahora. Los gobernantes deben entender que el pueblo sólo les encomendó la administración, mas nunca la disposición de los bienes públicos.”⁷²

Asimismo los sectores populares se muestran anuentes a aceptar la necesidad de modernización y desarrollo, por lo que no niegan:

“...la necesidad de fortalecer esta institución mediante un proceso de modernización, regido por los más altos valores y principios de la democracia civilista costarricense, caracterizada por la solidaridad, la concertación y la justicia social...”⁷³

Como contraste frente a los voceros oficiales, el mismo día que Julio Rodríguez comparaba a los “grupos de presión”, con los ejércitos latinoamericanos, los educadores de ADEP argumentaron que:

“Estamos convencidos de que el diálogo es la única solución viable, civilizada y racional para resolver el conflicto de intereses, tal y como es la tradición en

⁷² La Nación, martes 28 de marzo 2000.P.17.A

⁷³ La Nación, jueves 30 de marzo 2000. P.27.A

Costa Rica. El uso de la violencia y fuerza siempre han demostrado traer más caos y violencia...en perjuicio de los intereses de la comunidad.”⁷⁴

El diálogo no es ahora un bien dado, sino que es exigido a los personeros estatales. La crítica al proyecto se centra frecuentemente en la forma de su aprobación, oscurantista, por decir lo menos.

Resulta revelador un campo pagado por parte del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, quienes luego de una larga argumentación señalaban que la clase empresarial y la clase política, la cual asociaban, estaba intentando convertir al resto de costarricenses en subordinados suyos, lo que conllevaría una polarización que conduciría a una posible guerra, siendo esto profundamente anticostarricense. Veamos:

“La clase política que ha gobernado nuestro país en los últimos quince años, que ha diseñado un modelo de desarrollo que se basa fundamentalmente en privatización y en el privilegio de las leyes del mercado...La indignación popular mostrada en las calles, se debe al absoluto rechazo de la alta clase política que, en conturbenio con la clase empresarial y económicamente más poderosa de este país, está intentando apoderarse de todas las fuentes de producción de riqueza, relegando a la inmensa masa de costarricenses a desempeñar el papel de subordinados, asalariados, de dicha clase...Esta polarización social, destruirá la sociedad solidaria, fraterna, igualitaria, democrática, que nuestro pueblo ha tratado de construir desde su independencia...introduciendo en nuestro medio la agitación, la revancha, la ira, la agresión, la guerra, con sus secuelas de lágrimas, sudor y muerte.”⁷⁵

De lo anterior se sigue como el proceso de formación de sujeto muestra sus límites, se ajusta a los ideales que configuro la modelación particular del Estado costarricense en el

⁷⁴ La Nación, viernes 31 de marzo 2000. P.16.A, Julio Rodríguez en la P.15.A.

⁷⁵ La Nación, domingo 2 de abril 2000. P.32.A. Tres cuartos de siglo antes los productores de café argumentaban de forma similar, esa vez para defenderse en tanto pequeños y medianos propietarios frente a los beneficiadores. La similitud insinúa un principio homogeneizador latente como factor que legitimaría lo nacional, nuevamente en el fondo del discurso la igualdad, la fraternidad, la democracia pasa por el rechazo de la confabulación entre políticos y empresarios, sinónimo de privilegio, y con la identificación con una clase media implícita, merced al rechazo a igualarse a los subordinados y/o asalariados. Contraste notable con las organizaciones magisteriales que se definieron siempre como clase trabajadora o asalariados. Acuña, Víctor Hugo. “La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros costarricense (1900-1961)”. En: *Avances de Investigación* N°23. Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica: 1987.

proceso de incorporación/cooptación de los sectores populares durante el desarrollismo, pero sin trascenderlo. De ahí la difusa categorización de “pueblo”, donde algunos sectores se abstienen de identificarse como asalariados y/o subordinados, mientras otros se presentan frontalmente como clase trabajadora.

Finalmente la democracia en estos discursos se esgrime como un principio contractual, donde el pueblo depositaría el poder en manos del Estado siempre que esto se traduzca en bienestar, lo que no se lograría con acuerdos de cúpula, sino con una sustancialización de la democracia, implicando que democracia más que procedimiento es el cumplimiento de ciertas expectativas de bienestar social. Veamos como lo anterior fue señalado por un lector del Semanario Universidad, quien argumento que la transformación del ICE:

“...debe ser realizada con transparencias , no en cónclave o encerronas en hoteles o dentro del Castillo Azul o negociando mociones de reiteración según la conveniencia del diputado proponente y no del país, donde los participantes no son todos los representantes de las fuerzas vivas de este país, y no por el contrario como fueron realizados con las fuerzas interesadas y ajenas al bienestar de las mayorías...ya que con el proyecto en sí da la impresión de que renunciaron a pensar en lo social de este país y se dedicaron a calcular las ganancias que iba a generar la libre competencia y libre concurrencia...olvidándose de su responsabilidad política para con el pueblo costarricense, y por lo tanto en detrimento de la clase política a la cual ellos representan...Los diputados no deben olvidar que ellos tienen el poder en sus manos, que les fue conferido por nosotros los ciudadanos de este país, que somos un pueblo culto, lo que significa que tenemos capacidad de entendimiento y de razonamiento.”⁷⁶

Finalmente, a inicios de abril el Semanario Universidad publicó un artículo donde se quejan de la desnaturalización de la figura de Juan Santamaría. Para ellos las fiestas patrias deberían celebrar como: “*Juan Rafael Mora, [quien] con claridad meridiana, explica que la lucha contra el invasor [que] tiene como fin “conservar la independencia y la soberanía de Centroamérica”.*”⁷⁷ Estableciendo una relación entre Juan Rafael Mora y la defensa de la soberanía con la coyuntura del “combo”, siguiendo esta línea el

⁷⁶ Semanario Universidad, 15 al 21 de marzo 2000. P.18.

⁷⁷ Semanario Universidad, 12 al 16 de abril 2000. P.3.

historiador Juan Rafael Quesada estimó que Juan Santamaría “...significa un ejemplo de dignidad y de valores eternos como la soberanía, en momentos difíciles para el país.”⁷⁸

Asimismo, el mismo historiador consideró que: “...en cada costarricense opositor al “combo” hay un Santamaría...”⁷⁹ resemantizando de esta forma el mito originario de la nacionalidad costarricense reimprimiéndole un carácter popular, que trasciende la mera cooptación, a la figura del soldado Juan, pero fijando el discurso dentro de los márgenes que la misma modelación del Estado costarricense a lo largo de los siglos XIX y XX fijó.

El discurso aperturista: El Estado ha sido tomado por asalto

El discurso aperturista adquiere total coherencia en la década del noventa. Aparece como diatriba rabiosa en la coyuntura de 1995. Antes, aún en 1984, el proceso de apertura se justificaba como necesario para la justicia social.⁸⁰ Sin embargo, esto luego desaparece. En este discurso las instituciones del Estado son de los sindicatos, ergo no son de los costarricenses. Los sindicatos, entonces, pasan a ser anticostarricenses, al apropiarse de instituciones que se consideran “estratégicas” en este caso además públicas. Julio Rodríguez sintetizó esta propuesta, la cual luego de publicarse en página 15 fue reproducida en campos pagados, dicho planteamiento esgrime lo siguiente:

“La mafia funciona en todas partes, el Estado costarricense ha sido tomado por asalto. Esta es una de las dimensiones de la ingobernabilidad, pues al despojo y la corrupción siguen, como fieles interesados en mantener este permanente saqueo. ¡Cuan revelador sería revisar el modus vivendi y el patrimonio de ciertos personajes que, con sueldos regulares, han amasado fortunas!”

⁷⁸ Semanario Universidad, 12 al 16 de abril 2000. P.3.

⁷⁹ Semanario Universidad, 12 al 16 de abril 2000. P.3.

⁸⁰ En efecto, el entonces Presidente, Luis Alberto Monge, con respecto a la crisis aún afirma: “...aún gravitan amenazas sobre Costa Rica, aún nos golpea la crisis económica, pero el pueblo costarricense, con su indeclinable vocación pacifistas, con su invencible voluntad de defender sus valores espirituales, me da sólido fundamento para afirmar, sin la menor duda, que vamos a superar todos los obstáculos y que seguiremos avanzando por los cauces democráticos hacia la justicia social.”

La República, 10 de febrero de 1984.

¿Quién manda en Costa Rica? Esta es la cuestión. ¿Hasta cuando subsistirá nuestra democracia? Esta es la segunda cuestión.”⁸¹

Para Edgar Espinoza la culpa la tienen los mismos gobiernos, ya que ciertas instituciones son un error histórico:

“Es doloroso para alguna gente, pero la culpa la tienen los mismos gobiernos que históricamente llenaron al país de elefantes blancos hasta causarle el estrago que sufre...Es más, conforme el tiempo pase y se apliquen las nuevas medidas, el país se irá dando cuenta de cuantas cosas inútiles se inventaron los gobiernos por politiquería del pasado.”⁸²

Poco después un empresario termina de cerrar está lógica, en efecto, ante todo deben primar nuevos valores como la competencia y la eficiencia mientras: *“Mantener el monopolio de la telefonía celular es fortalecer la incompetencia, la ineficiencia, las huelgas, el boicot y más.”⁸³*

Esta “tozudez” es explicada por un Administrador de Negocios en los siguientes términos: los sindicatos fueron como Goliat y sacaron a Millicom de su territorio, el Estado es un pobre David que no logra asestar el golpe de gracia.⁸⁴

La Reforma del Estado, imbuida por estos sectores de auras de eficiencia y competitividad, se convierten así en algo inevitable, la actitud patriótica que se debe esperar es entonces el sacrificio de los glotones que supuestamente se nutren del Estado, es así como José Joaquín Tejos Fonseca propone lo que llamó “La solución democrática”, donde:

“Cada ciudadano debe -y puede- aportar pensamientos y acciones superiores en procura del bienestar general...[donde] El interés de la nación debe imponerse sobre la mezquindad y la demagogia...No conviene escapar al debate que en todo

⁸¹ La Nación, martes 6 de junio 1995. P. 28.A

⁸² La Nación, jueves 15 de junio 1995. P. 15.A

⁸³ La Nación, martes 30 de mayo 1995. P.15.A

⁸⁴ La Nación, martes 13 de junio 1995. P.14.A

el globo, y bajo todos los designios ideológicos, suscitan los temas relacionados con la descentralización administrativa y la Reforma del Estado. Menos aún, cuando desde hace medio siglo sufrimos las consecuencias de un paternalismo incapaz e impotente para satisfacer aspiraciones y derechos fundamentales del individuo y la colectividad.”

En esta última parte vemos como el Estado construido en la segunda mitad del siglo del siglo XX es retratado como una desviación, que atentan contra la Nación y el individuo. Ya que de la persecución egoísta del bienestar individual, no del paternalismo incapaz, surgirá la felicidad colectiva. Este criterio es externado también por el mismo PLN. En 1995 el entonces Presidente del Partido, Walter Coto Molina, externo, plegándose al vocabulario de moda:

“El Estado burocratizado, paternalista, ineficiente, clientelista y omnisciente se acabó. La concepción estatista con participación directa en las empresas y el comercio, monopolizador de la verdad y de iniciativas se quebró. Vamos hacia un nuevo Estado con otras características: estratégico, ágil, concertador, eficiente y democrático.”⁸⁵

Sin embargo, no debemos dejar de destacar las contradicciones que se generaron a lo interno del PLN. En efecto, varios precandidatos, diputados, y un sector importante del liberacionismo se mostraron contrariados por las políticas oficiales del gobierno de 1995, las cuales fueron tachadas de anti-liberacionistas, y en ocasiones de anti-costarricenses. Dicho fraccionamiento se debió a que la política económica del oficialismo muchas veces contrariaba ciertos elementos simbólicos construidos por Liberación en el período desarrollista (1949-1978). En efecto, la banca mixta que se consolidó con el redescuento bancario en este año, así como la firma del Pacto Figueres-Calderón fueron vistos con gran recelo por parte de algunos sectores del Partido. De esta forma, José Miguel Corrales afirmaba: *“...las reformas que impulsa el Gobierno deben tener un sello liberacionista y sabor costarricense...”*⁸⁶ mientras Corrales y José Luis Villanueva manifestaron su descontento porque las: *“...decisiones tomadas por una pequeña cúpula*

⁸⁵ La Nación, jueves 15 de junio de 1995. P.14.A

⁸⁶ La Nación, lunes 19 de junio de 1995. P.6.A

*se alejan de los conceptos de equidad y solidaridad.”*⁸⁷ Asimismo, producto del Pacto surgió un nuevo grupo que pretendía rescatar las raíces liberacionistas, este se denominó Tercera República, anunciando ya el resquebrajamiento ulterior del Partido. Este resquebrajamiento, sin embargo, es rastreable hasta la década de los ochenta, donde en la coyuntura de la aprobación del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), el entonces Ministro de Planificación, Juan Manuel Villasuso, fue desplazado del Gobierno por defender una política de reactivación de la demanda interna.⁸⁸

Cualquier manifestación de oposición debía ser *a priori* censurada, ya que atenta contra los causes institucional formales en los que se asentarían la democracia y la paz. Es así como luego de la firma definitiva del “Pacto Patriótico” el editorial de “La Nación” afirma: *“Este es el fin y cualquier posición entorpecedora es irracional y antipatriótica.”*⁸⁹

En el Estado, “tomado por asalto”, se afincan sectores que en este universo de significación se presentan como ajenos, antipatriotas y anticostarricenses, que atentan contra la democracia y por lo tanto, contra lo nacional. La existencia de estos villanos que “tomaron por asalto” al Estado justifica que contra éste o más bien contra sus instituciones se libere una guerra sin cuartel; por una vía supuestamente técnica, apolítica, neutral, desinteresada: la del mercado. Todos estos elementos se articulan alrededor de un discurso de modernización que supone como necesaria la competitividad, eficiencia. En este sentido el discurso es fatalista, hay una única vía y ésta es inevitable. De ahí que el temor a no cumplir esos preceptos se convierta en una justificación discursiva omnipresente, siendo que lo que es bueno para la competitividad y la eficiencia sinónimo de bienestar y justicia social, elementos discursivos nacionales, que ningún sector parece obviar. En este sentido el espacio de la democracia es uno meramente procedimental, democracia es la elección periódica de representantes cuyas decisiones son

⁸⁷ La Nación, lunes 19 de junio de 1995. P.6.A

⁸⁸ Rovira, Jorge. Op. Cit. 1987. pp.57-163.

⁸⁹ La Nación, domingo 25 de junio 1995. P.13.A

incontestables, lo económico-social esta fuera de este campo de procedimientos, ellos se deciden en el mercado. Lo que se le pide a los sectores sociales es sacrificio, un sacrificio trágico, en tanto se presenta como inevitable, tragedia de la cual, sin embargo, son responsables por haberse beneficiado de los derechos conquistados en el período anterior, derechos que, sin embargo, se presentan como privilegios:

La mayoría de los compromisos suponen sacrificios para sectores específicos, sea porque se eliminaran empleos, se reducen beneficios y privilegios o se establecen límites a la discrecionalidad de los funcionarios...Pero también en la democracia existe el derecho -y más todavía, el deber- de que el Gobierno y los partidos políticos actúen en función de objetivos nacionales, no de intereses y aspiraciones sectoriales.”⁹⁰

Es así como lo novedoso radique en que a pesar de que se reconocen las demandas por la justicia social como legítimas, se considere ilegítimo que se resuelvan a través del Estado, ahora es el mercado el que reparte bienestar de forma “natural” o “técnica” de acuerdo al esfuerzo de cada quien. Individuos abstractos, supuestos en el discurso como neutralmente iguales, lo que señala la veracidad del discurso como falazmente ideológico, dada la desigualdad campante en el proceso de concurrencia.

El discurso, sin embargo, no sólo es trágico, sino además autoritario, con abiertas manifestaciones de negativa al diálogo y a la tradicional incorporación/cooptación dentro de la dinámica política costarricense. Julio Rodríguez ejemplificó los altos grados de intolerancia mostrados por estos sectores. Por ejemplo, la oposición al “combo” fue presentada como ignorancia o manipulación:

“Nuestra democracia, -decía-, ha exhibido entre estudiantes, profesores, dirigentes y algunos políticos irresponsables y un elevado grado de debilidad e inmadurez, a ritmo de los dirigentes sindicales, repletos de eslóganes y frases simplistas. Nuestra democracia hace aguas en la educación.”⁹¹

⁹⁰ La Nación, martes 13 de junio 1995. P.13.A

⁹¹ La Nación., lunes 27 de marzo 2000. P.15.A.

El autoritarismo se agudizó, según cabía esperar, a medida que se desarrollaron los movimientos en contra del “combo”. En efecto, la línea editorial del periódico “La Nación” no se cansó de argumentar que la “mayoría silenciosa” de costarricenses apoyaba el Proyecto, hecho refutado luego por vía de encuestas. Los que protestaban eran una manada de desviados que atentaban contra la democracia, y por ende contra lo auténticamente costarricense. Es así como, Eduardo Ulibarri señalaban que la oposición era:

“j...la disposición de varios sectores sociales a tratar de controlar -violentamente incluso- las mecanismos de la democracia representativa para imponer sus intereses...Lo intolerable es que esa protesta legítima intente suplantar las decisiones de los organismos representativos...esto no solo conspira contra la paz social, sino contra el estado de derecho y la democracia...”⁹²

El discurso que vincula democracia y paz con el respeto a las decisiones de los cuerpos representativos queda acá mostrado. La “paz social” equivale al hecho de que la toma de decisiones políticas se encause por instituciones formales, con independencia de las manifestaciones sociales de disenso. La democracia, al igual que en la coyuntura anterior, se iguala a su forma, a procedimientos, escondiendo en sus intersticios las estrategias de clase que impulsa el poder. La representatividad es entonces vitoreada, y la protesta presentada como un acto anti-democrático. En el editorial del jueves 23 “La Nación” dirigiéndose en una “Carta abierta a un manifestante” dice:

“...pero lo que no tiene ningún derecho es a imponer su voluntad en las calles...lo instamos a que se informe y reflexione sobre el verdadero contenido de la Reforma y a que exija razones a quienes quieren arrastrarlo al paro o a la calle. Entienda, además, que las autoridades deban exigir respeto a la convivencia civilizada y al estado de derecho. Ese es su deber hacia los costarricenses.”⁹³

⁹² La Nación, miércoles 22 de marzo 2000. P.13.A.

⁹³ La Nación, miércoles 22 de marzo 2000. P.13.A.

Esgrimiendo claramente el concepto de que lo ya pactado por la Asamblea no puede ni debe ser sometido a crítica social, debe ser acatado, punto. Oscar Arias, actual presidente, electo en medio de serios cuestionamientos, se muestra claro en este respecto. En efecto, en aquella ocasión señaló que el “capítulo se cerro” con la votación legislativa, y que hasta ahí llega la democracia, al tiempo que se queja porque los manifestantes le ponen “etiquetas” (¿le habrán dicho neoliberal?), veamos:

“La democracia debe ser siempre un ejercicio de cordura, tolerancia y respeto. Es un debate permanente en el que cada capítulo se cierra, necesariamente, ante una votación...Es lamentable que hayan todavía en nuestro país personas y grupos que conservan, como argumento para oponer la violencia a la legalidad democrática, la costumbre de poner etiquetas a quienes no comparten sus ideas.”⁹⁴

El mismísimo Presidente de la República, mostrándose desafiante luego de una semana de protestas descalificó a los manifestantes calificándolos de subversivos:

“Aquí, frente a Casa Presidencial, hubo llamados a la subversión; si dejamos que esto se nos vaya de las manos podemos llegar a la ingobernabilidad total y esta modernización es indispensable para el país... Creer que un grupo o una persona puede arrogarse el derecho de imponerle a los órganos del Estado cuáles son las opciones a seguir, no es posible en una sociedad democrática, eso es subversión. Puedo oponerme a algo siguiendo los cauces del sistema republicano.”⁹⁵

Al respecto, cabría que el mismo Ministerio Público ha puesto recientemente en duda de que Rodríguez Echeverría siguiera los cauces legales del sistema republicano... Asimismo, el fantasma evocado de la izquierda conspirando no favoreció el discurso oficial frente a la ciudadanía. Por otra parte un empresario comparte exactamente el mismo criterio del periódico antedicho al señalar:

“...las violaciones a los derechos constitucionales que se están llevando a cabo por dirigentes sindicales que dicen actuar en nombre del pueblo, manifestándolo así con toda desfachatez, aún frente a las cámaras de televisión...Nuestra

⁹⁴ La Nación, miércoles 22 de marzo 2000. P.14.A.

⁹⁵ La Nación, domingo 26 de marzo 2000.P.4.A y 5.A.

supuesta democracia se fundamenta en el sufragio, mediante el cual el pueblo elige a sus legítimos representantes en la Asamblea Legislativa.”⁹⁶

Vemos como nuestro autor empresarial no considera a los sindicatos voceros de intereses legítimos (lo que negaría el Código de Trabajo y las Garantías Sociales consagradas en la Constitución), declarando que ellos atentan contra los derechos constitucionales, violentando así la democracia.

Otro empresario se enfurece con la supuesta letanía costarricense, señala que el proyecto se debe aprobar ya, rápido, reproduciendo el esquema fatalista ya esbozado:

“El resto del mundo se niega a entender el concepto de “más tiempo que vida”, el resto del mundo piensa que si no se mueven y hacen las cosas hoy (en lugar del año entrante) algún vecino se les va a ir arriba...retrocedemos en el tiempo, nos alejamos de lo desarrollo económico y del bienestar al que siempre hemos creído tenemos derecho...Es una falta de seriedad pensar si tenemos tiempo para seguir discutiendo si el monopolio tiene o no sentido.”⁹⁷

La Promotora de Comercio Exterior Costarricense (Procomer) organización que agrupa a varias cámaras empresariales señala esta supeditación de la competitividad al bienestar social, al tiempo que reafirman la ilegitimidad de las manifestaciones públicas de los sectores sociales contra el “combo”, señalan que la apertura y competencia del ICE:

“...se traducirán en una sustancial mejora de la competitividad de las exportaciones, base fundamental de la estrategia para impulsar la generación de empleo y bienestar social en Costa Rica...En un país democrático como Costa Rica, los ciudadanos tenemos el derecho de manifestar nuestras opiniones a favor o en contra de un determinado proyecto pero, sin atentar contra la libre circulación, la estabilidad política, social y económica del país.....instamos a todos los ciudadanos a actuar con cordura y a mantener nuestro accionar dentro del orden constitucional con apego al estado de derecho.”⁹⁸

⁹⁶ La Nación, viernes 24 de marzo 2000. P.15.A.

⁹⁷ La Nación, viernes 25 de marzo 2000. p.15.A.

⁹⁸ La Nación, lunes 27 de marzo 2000. p. 21.A.

Ante el temor de que tan monolítica estructura de pensamiento se resquebrajará Julio Rodríguez reprende a aquellos periodistas y/o columnistas que osaron siquiera sugerir que las manifestaciones sociales no se debían exclusivamente al “combo”, sino que podían ser producto del deterioro de ciertas condiciones sociales, y del descrédito de la “clase política”. En efecto, un día después de que el mismo periódico La Nación publicará una larga lista de demandas insatisfechas en la población,⁹⁹ entre otros; el escritor de la columna “En Vela” desmentía con furia:

“La insatisfacción social acumulada justifica todo lo que ha ocurrido, ¡Terrible sofisma!...El bloqueo de vías no es un grito popular adolorido. Es un acto de delincuencia...irrespeto a la institucionalidad, sin la cual la democracia decae y el país se estanca.”¹⁰⁰

Finalmente la Unión de Cámaras Empresariales (UCAEP) condenaba lo que llamaba subversión y un atentado contra lo que caracterizaría a Costa Rica, mientras le pide al Presidente de la firmeza y sacar adelante el proyecto. No hay punto medio entre los agitadores que no entienden que se está buscando su propio progreso y que se comportan como no-costarricenses y las fuerzas oficiales, voceras legítimas de un Estado que procura la tranquilidad y la paz:

“Lo que está en juego en estos momentos no es un proyecto de ley; es la paz social y la estabilidad política que por muchos años han caracterizado a este país y lo han destacado en el concierto mundial de las naciones...la tranquilidad social y la convivencia pacífica en un Estado de Derecho...No caigamos presa de quienes, recurriendo a la manipulación, la demagogia y la mentira buscan

⁹⁹ Entre las que incluían: fraude y cierre del Banco Anglo, desfalco en el Fondo de Asignaciones Familiares, en Aviación Civil, en Compensación Social, en el Banco Internacional Costarricense S.A., en el Fondo Nacional de Emergencias, pérdida de créditos del Fondo de Desarrollo Agrícola, estafas con Certificados de Abono Tributarios, incentivos turísticos, subsidios a empresas extranjeras, inflación y aumento del costo de los combustibles, estructura tributaria injusta, estancamiento del ingreso promedio, bajo crecimiento económico, duplicación de los salarios de los diputados en el 98, intento de aumentar el salario presidencial en el 99, tramitación expedita del seguro de vida del suegro del Presidente de la República, desgravación arancelaria sin política agrícola, remate de parcelas y casas de pequeños deudores, crecimiento de las exportaciones en contraste con el estancamiento del consumo interno, evasión fiscal de las empresas, fuga de presos acusados de corrupción, inseguridad ciudadana, entre otros. La Nación, lunes 27 de marzo 2000. p.6.A.

¹⁰⁰ La Nación, miércoles 29 marzo 2000. p.15.A.

sembrar el caos y desestabilizar nuestra democracia...El sector empresarial está con ustedes [se refiere al Presidente y a 45 diputados que votaron favorablemente el proyecto]. No claudiquen, la historia sabrá recompensar su patriótica contribución.”¹⁰¹

Sin embargo, el consenso sí se resquebrajó. Sectores de Liberación Nacional se echaron atrás ante las muestras de insatisfacción popular. José Miguel Corrales llegó hasta manifestar que el “combo” socavaba las bases de nuestra “centenaria democracia”:

“...la incredulidad socava las bases de nuestra centenaria democracia...Comparto la urgente necesidad de modernizar el ICE para que pueda enfrentar con éxito los retos de un mundo tecnológico y globalizado. Ese objetivo, sin embargo, no está claramente definido en el proyecto de ley; por el contrario, se está dando pie a un paulatino debilitamiento de la Institución en perjuicio de los mejores intereses de la Patria.”¹⁰²

El peso del discurso nacional-desarrollista del PLN se cierne como fantasma que termina por escindir políticamente a la agrupación. En efecto, si bien no buscó se reestructurar en su totalidad la ideología nacional, nutriéndose más bien de ella, sí construyó símbolos y principios homogeneizadores que imbricaban al nuevo Estado con la justicia social, cuyo sostén idílico, la clase media, se vinculaba con el proyecto de modernización de dicho partido. Así por ejemplo, Figueres hablaba de la clase “económicamente sana”. En efecto, Figueres, en uno de sus discursos presidenciales del primero de mayo de su último período (1970-1974) afirmó que en Costa Rica:

“...un tercio de nuestra población vive en condiciones inaceptables en el mundo de 1970. Tal vez otro tercio constituye la clase media económicamente sana, mientras el resto restante, o parte de él vive demasiado bien.”¹⁰³

El ideal mesoclasista, al menos en su configuración discursiva fue claramente esbozado y luego abatido. Aunque siempre quedo como legado manifiesto en el seno de la

¹⁰¹ La Nación, lunes 27 de marzo 2000. p.37.A.

¹⁰² La Nación, domingo 26 de marzo 2000. p. 29.A.

¹⁰³ Mena, Marco A. (Comp.) *Mensajes Presidenciales, años 1970-1982*. Tomo X. Academia de Geografía e Historia. San José, Costa Rica. 2002. En adelante: MP X. p.19.

agrupación, de ahí que, la adopción que realizó la cúpula del Partido del discurso neoliberal-aperturista encontró resistencias en su interior. Como veremos, algunos trazos de este discurso fueron incorporados por los voceros de los sectores populares. Mientras que un sector escindido de aquella agrupación alimenta hoy el sector de oposición institucional-partidaria al mismo.

Conclusiones

La investigación muestra la persistencia de etiquetas nacionales en los discursos contendientes en las coyunturas de algidez social de la década del 90, la palabra clave aquí es democracia. Sin embargo, lo que los sectores entienden por democracia se limita a los procesos formales de elección periódica, y su recurrencia discursiva enfatiza la necesidad de orden y respeto hacia la autoridad. Por otro parte, los voceros de los sectores sociales asumen el concepto de democracia a partir de la sustancialización de prácticas de inclusión política y/o de políticas sociales cuyo marco de referencia es una clase media implícita. En este sentido esta divergencia semántica marca una profunda brecha que se subsana por la desconfianza y deslegitimación de los espacios de representación formales, tal como el no reconocimiento de la Asamblea Legislativa como un espacio legítimo *per se*.

En el caso del discurso de los voceros de los sectores oficiales, como anunciábamos a inicios del trabajo, el umbral de clase media se ha abandonado. En este sentido, los elementos articuladores del discurso pasan por una defensa a ultranza de las etiquetas nacionales arriba señaladas sumadas al discurso neoliberal. En el caso de los voceros de los maestros su auto-representación no se construye en base a la figura de clase media, más bien se autodenominan clase trabajadora, asalariados; etc. posiblemente por su larga tradición sindical. Sin embargo, el desarrollismo como umbral discursivo, y la

vinculación de democracia con justicia social se presenta en todos los sectores sociales que entraron en conflicto con el Estado durante el período.

Algunos de estos sectores, con una trayectoria sindical más reciente o inexistente, sí se presentaron como clase media. En el caso de los ingenieros del MOPT en 1989 esto resultó explícito, incluso se manifestaron como seguidores del PLN, a cuyo Gobierno en ese momento enfrentaban. Mientras la Unión Médica Nacional, en el 2000 expresó su autorepresentación en términos implícitos. Lo anterior nos conduce a la conclusión provisional de que la apropiación discursiva de un umbral de clase media está relacionado con la experiencia organizativa y sindical de los distintos grupos sociolaborales costarricenses.

La centralidad del discurso tecnocrata-neoliberal se ha profundizado, especialmente a partir de la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. El proceso electoral del presente año se define por dos aspectos acá dilucidados, por un lado, el proyecto de las clases dominantes con el programa de transformación neoliberal de la economía, impulsado bajo cualquier medio posible, y por otro, la negativa de los sectores populares a aceptar la legitimidad de dicho proceso. La coyuntura señala a una ciudadanía fuertemente dividida, especialmente alrededor del TLC, Caballo de Troya para la privatización de las instituciones del Estado y culminación del proceso de reforma del mismo bajo signo neoliberal. La negativa a aceptar como legítimo un eventual triunfo del candidato de las clases dominantes, Oscar Arias, dada por algunos sectores sociales antes del proceso electoral, señala los puntos de ilegitimidad alcanzados por el sistema político/representativo, el aumento del abstencionismo y los señalamientos de triunfos dudosos del candidato mentado llevan a dar más fuerza a este argumento. Su subsiguiente triunfo bajo serios cuestionamientos por parte de la oposición, y con apenas un 25% del apoyo del electorado no han revertido, sino profundizado esta polarización. La coyuntura está abierta, que los actores trasciendan los marcos de representatividad discursiva esbozados hasta ahora, y las posibles determinaciones que estos tendrán sobre sus actuaciones está por hacerse....